



Víctimas de tres cárteles: CDG, CDN y el "de Migración

(Juan Alberto Cedillo, pág. 37-39)

La tarde del viernes 22 un convoy de camionetas con miembros de la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste (CDN, los antiguos Zetas), arribaron a la comunidad de Los Guerra, municipio de Miguel Alemán, a través de la “Brecha 57”, un largo y solitario camino de terracería que inicia en Nuevo León y está sembrado de camionetas calcinadas.

El comando buscaba a un alto mando del grupo rival, el Cártel del Golfo (CDG), que controla los principales municipios de la “frontera chica” de Tamaulipas, según testigos entrevistados por Proceso en México y Guatemala.

El capo que buscaba el CDN, El Entenado, escapó de los sicarios. Ello llevó a la Tropa del Infierno a peinar la zona para “ejecutarlo”. Durante su búsqueda detectaron una “casa de seguridad” entre Camargo y Díaz Ordaz, donde se ocultaban 34 migrantes originarios de Comitancillo y San Marcos, Guatemala, esperando que los cruzaran a Estados Unidos de forma segura, para lo cual cada uno pagó 14 mil dólares a coyotes guatemaltecos.

A su vez, los coyotes le pagan a CDG entre 700 y mil 500 dólares por persona para usar recónditos sitios de cruce del río Bravo para pasar con los migrantes ilegales.

Cuando los sicarios del CDN descubrieron a los guatemaltecos, los asesinaron y apilaron sus cuerpos en la parte trasera de una camioneta, que manejaron hasta los límites con Nuevo León para quemarla y abandonarla. Por sólo unos metros, el vehículo quedó en Tamaulipas.

Testimonios recolectados en Guatemala revelan que uno de los dos coyotes – padre e hijo– que acompañaban a los migrantes guatemaltecos –indígenas de lengua mam– logró escapar con 12 de ellos. En cuanto pudo avisó a sus familiares sobre la tragedia del viernes 22.

En un comunicado, la Fiscalía de Tamaulipas informó que “la tarde del 23 de enero autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública fueron alertadas por un reporte ciudadano de que en una brecha del poblado Santa Anita se encontraba un vehículo incendiado.

“En una de las camionetas localizadas estaban dos cuerpos en la cabina, otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo”.



En entrevista con Proceso el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Felipe Rodríguez, reveló que la fiscalía estatal ya tomó pruebas de ADN de los 19 cuerpos y trabaja con autoridades guatemaltecas para cotejarlas con los probables familiares a fin de identificar a las víctimas. Detalló que se trata de 16 hombres, una mujer y dos cuyo sexo aún no se ha determinado.

El domingo 24 el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, que ha defendido la seguridad de los migrantes y sostiene un refugio para los originarios de Centroamérica, exigió justicia durante su homilía.

Expuso que esos trabajadores representan onerosas ganancias para las diversas mafias del crimen organizado que operan en el país: “Son un negocio porque los ayudan a pasar a Estados Unidos y sus familias se endeudan allá. Y dice la gente de Santa Anita que en la casa de seguridad donde los sacaron tenían guatemaltecos.

“Ahí la gente dice que un cártel tenía a personas, delito que se llama trata, porque les sacaban dinero para pasarlos; pero el grupo enemigo, que no quiere que sus rivales ganen dinero con ellos, decidió matarlos e incinerarlos”.

La travesía de los migrantes guatemaltecos por México es muy diferente a la del resto de la migración centroamericana, señala Rubén Figueroa, coordinador en el Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano.

El coyote guatemalteco siempre acompaña a sus clientes; cuenta con una red de protección en México, que incluye camiones de redilas, donde los transportan; casas de seguridad a lo largo del trayecto y protección pagada a policías municipales y estatales... pero también al “cártel de Instituto Nacional de Migración”.

No llegan vacunas... y López Obrador le pide ayuda a Biden *(Rodrigo Vera, pág. 6-10)*

En México no hay vacunas para menguar la incesante pandemia. Pese a los reiterados anuncios de que desde el mes pasado han sido comprometidas, precompradas o adquiridas, es tal la falta de las sustancias que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a su par estadounidense, Joe Biden.

En la conversación telefónica que tuvieron el viernes 22, López Obrador buscó el favor del nuevo presidente estadounidense para la obtención de vacunas. Biden le respondió que no era el momento, porque su prioridad es la población de Estados Unidos.



Según fuentes diplomáticas de México y Estados Unidos, el mexicano también abogó por los paisanos que viven legal o ilegalmente en territorio estadounidense; Biden aseguró que su plan de vacunación es universal, sin importar la condición migratoria de sus habitantes.

Consultada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evitó referirse a esa versión, porque ambos gobiernos decidieron reservar los detalles de la entrevista, aunque dijo que acordaron reactivar la colaboración en temas de pandemia e investigación.

Sobre las vacunas, informó que el martes 2 de febrero comenzará en Querétaro la fase III de la vacuna de la compañía estadounidense de biotecnología Novovak. Apenas el jueves 28 la firma aseguró que su producto tiene una eficiencia de 89.3%. En esta fase, en la que con una muestra amplia se prueba la eficiencia y seguridad de la vacuna, la empresa probará al azar con más de 16 mil participantes, de un total de 30 mil personas que fueron enroladas en México y en Estados Unidos.

La SRE también informó que la US Mexican Foundation pretende comprar un millón de vacunas de compañías estadounidenses para donarlas a México.

Horas después de la conversación entre los mandatarios, López Obrador fue diagnosticado positivo al covid-19. A pesar de que su gobierno ha insistido en que tiene aseguradas millones de vacunas, por el momento en el país solamente se están aplicando las vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que se han suministrado a 657 mil personas, que apenas representan 0.5% de los 126 millones de habitantes del país.

Para colmo, Pfizer-BioNTech –sociedad estadounidense y alemana– acaba de disminuir en 50% su último envío de vacunas a México, pues de las de 436 mil dosis programadas para mediados de enero, las redujo a 219 mil debido a que está remodelando su planta de producción en Bélgica.

2020, el mas año más letal

(Mathieu Tourliere, pág. 21-23)

En julio y agosto del año pasado, un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia de covid-19 había sido “domada” en México, ocurrieron 56 mil 614 defunciones derivadas de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, al ritmo de 913 muertes por día.



Por lo menos durante estos dos me-ses, el covid-19 fue la principal causa de muertes en México, y su propagación en una población vulnerable como la mexicana convirtió 2020 en el año más letal en la historia reciente del país, con 954 mil 517 defunciones registradas por la Secretaría de Salud (Ssa) hasta el 12 de diciem-bre, 40% más que las cifras esperadas sin pandemia.

El incremento fue brutal: en un día cualquiera de los primeros ocho meses de 2019 fallecían, en promedio, 2 mil 56 per-sonas en México; durante el mismo periodo del año siguiente murieron 2 mil 814 personas por día, según las “estadísticas de exceso de mortalidad por las principales causas de muerte” que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el pasado martes 26.

La llegada de cientos de cuerpos adicionales saturó los servicios funerarios hasta la fecha, creando un embudo que alarga varios días los plazos para enterrarlos; aparte, el covid-19 devastó a sus trabajadores: por lo menos cuatro de cada 10 de ellos se infectaron, y al menos 3 mil fallecieron, según comunicó la semana pasada la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México.

El sistema hospitalario también sufre una sobrecarga, y el personal de salud de México pagó un precio muy alto por estar en primera línea de la atención a las personas enfermas: 2 mil 470 fallecieron por co-vid-19 en 2020, con un promedio de nueve muertes registradas por día a partir del mes de abril. México es, después de Estados Unidos, el país que registró el mayor número de pérdidas en su personal de salud.

Los datos del INEGI –basados en los certificados de defunción a nivel nacional– exhiben el tamaño real de los estragos que está causando la pandemia de covid-19 en el país, con cifras de defunciones mucho más graves que las que reportaban la Ssa y sus voceros el año pasado, pues se limitaban a las defunciones ocurridas en hospitales.

Así, en los meses de julio y agosto, durante los cuales la epidemia alcanzó su primer “pico” en México, las autoridades sanitarias reportaban 36 mil 731 defunciones por covid-19 en sus cifras oficiales –equivalentes a 592 muertes al día, en promedio– o 54% menos que las del Inegi.

Según el Inegi, entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 mil 823 fallecimientos en todo el país, es decir, 184 mil 39 muertes más que en 2019 y 203 mil 102 más que en 2018; la Ssa, por su parte, reporta un “exceso de mortalidad” de 274 mil 487 personas al 12 de diciembre.



El exceso de mortalidad se refiere a la diferencia entre el número de defunciones observadas en cierto momento y el número que normalmente se esperaría para el mismo periodo. El exceso de mortalidad que reportaron el Inegi y la Ssa resulta mucho mayor a las cifras oficiales de defunción por covid-19; esta subestimación sucede en todos los países –en distintos grados– y no es un fenómeno específico en México.

Según las cifras oficiales, México ya es el tercer país con el mayor número de muertes por covid-19, detrás de Estados Unidos y Brasil. Rebasó a la India en números oficiales de fallecidos el jueves 28, cuando las cifras de la Ssa superaron las 155 mil 145 muertes, aunque la cifra real sea probablemente más de dos veces mayor.